
¿Qué afecta a la participación electoral? (*)

André Blais

¿Por qué es mayor la participación en algunos países o elecciones que en otros? ¿Por qué se incrementa o reduce con el paso del tiempo? Para dar respuesta a estas preguntas, empezaré por los trabajos pioneros de Powell y Jackman y más tarde revisaré otras investigaciones más recientes. Este trabajo trata de dilucidar qué proposiciones sobre las causas de las variaciones en la participación electoral se ven sólidamente respaldadas por los datos empíricos y cuáles siguen siendo ambiguas. La mayor parte de la investigación se refiere a democracias consolidadas, pero también se incluye el análisis de democracias no consolidadas.

Palabras clave: instituciones, sistemas electorales, sistemas de partidos, competitividad electoral.

INTRODUCCIÓN

La visión predominante en la literatura ha sostenido: que las investigaciones existentes sobre la participación electoral han establecido algunos patrones robustos; que conocemos relativamente bien por qué la participación es más elevada en unos países que en otros y que los principales factores que condicionan la participación son las variables institucionales. Mi veredicto es diferente. Muchos de los hallazgos de los estudios comparativos de varios países no resultan robustos y, cuando lo son, carecemos de una explicación con microfundamentos convincentes de la relación. Asimismo, el impacto de las variables institucionales puede estar sobrevalorado.

(*) Traducción del inglés realizada por Josep Ventura. Este artículo fue originalmente publicado en A. Blais (2006), "What Affects Voter Turnout?", *Annual Review of Political Science*, vol. 6: 111-125.

ESTUDIOS PIONEROS

El estudio de la participación electoral empezó con el premiado libro de Powell (1982), *Contemporary Democracies*, que presentó la participación electoral como uno de los tres principales indicadores del rendimiento de la democracia, y con dos artículos de Powell (1986) y Jackman (1987) en la *American Political Science Review*.

El artículo de Powell en la citada revista analizaba la participación media en 17 países en la década de los años setenta. Descubrió que la participación era mayor en países con “distritos competitivos a nivel nacional” y con “vínculos fuertes entre partidos y grupos [sociopolíticos o sociales]”. Los distritos competitivos a nivel nacional fomentan la participación porque “los partidos y los votantes tienen los mismos incentivos para hacer que los votantes vayan al colegio electoral en cualquier parte del país” (Powell, 1986: 21), y la decisión de votar es más sencilla si los grupos sociopolíticos (como sindicatos, iglesias o asociaciones profesionales) están claramente asociados con partidos determinados (Powell, 1986: 22). La principal conclusión de Powell es que, en los Estados Unidos, la participación se ve inhibida por su contexto institucional, con especial énfasis en los vínculos entre partidos y grupos, que constituyen la principal variable de su modelo.

El artículo de Jackman (1987) tenía el mismo espíritu, pero con un énfasis en las instituciones todavía más acusado. Jackman analizaba la participación media de 19 países en los años setenta y obtenía resultados mucho más claros que mostraban que la participación electoral se veía afectada por cinco variables institucionales: distritos competitivos a nivel nacional, no proporcionalidad electoral, multipartidismo, unicameralismo y obligatoriedad del voto.

Jackman se había inspirado en el trabajo de Powell, pero el conjunto de variables con el que se quedó era distinto. Lo más importante es que el principal factor de Powell, el vínculo entre partidos y grupos, fue excluido cuando se descubrió que no tenía un efecto sistemático. El conjunto de variables de Jackman fue el que definió la agenda de investigación.

Caben varios comentarios acerca del estudio de Jackman. En primer lugar, aunque se centra en factores institucionales, uno de ellos, el número de partidos, debería considerarse consecuencia del contexto institucional. En segundo lugar, dos variables, los distritos competitivos a nivel nacional y la no proporcionalidad electoral, son aspectos del sistema electoral. Se encuentran correlacionadas mutuamente (los distritos más grandes producen resultados más proporcionales) y no está claro si las dos deberían incluirse en un mismo modelo. En tercer lugar, el análisis de Jackman no incluye variable socioeconómica alguna. Un modelo más completo debería integrar el papel desempeñado por el contexto socioeconómico.

El libro de Powell (1982) tiene en cuenta un amplio abanico de países, 29 en total, aunque el análisis de la participación electoral se reduce a 23 casos. Su modelo distingue entre tres bloques de variables: el entorno social y económico, la configuración constitu-

cional (las instituciones en sentido estricto) y los sistemas de partidos y los resultados de las elecciones. En su modelo final de análisis de senderos (figura 6.1, p. 121), Powell identifica cuatro variables significativas: una socioeconómica (producto nacional bruto per cápita), dos constitucionales (representación proporcional y leyes movilizadoras del voto) y uno relacionado con el sistema de partidos (vínculos entre partidos y grupos).

El modelo secuencial de Powell, que identifica un conjunto lejano de variables (socioeconómicas), un conjunto intermedio (instituciones) y los factores más próximos (sistemas de partidos y resultados de las elecciones), parece bastante útil. En este artículo se revisarán los datos sobre los efectos de estos tres tipos de factores, empezando por el impacto de las instituciones, que han sido el principal objeto de estudio de la mayoría de la literatura.

EL IMPACTO DE LAS INSTITUCIONES

Jackman identifica tres instituciones que parecen fomentar la participación: el voto obligatorio, el sistema electoral y el unicameralismo. Asimismo, se han propuesto otras variables institucionales.

Voto obligatorio

Jackman estima que el voto obligatorio incrementa la participación en 13 puntos porcentuales. Este patrón ha sido confirmado por todos los estudios sobre participación en las democracias occidentales y la magnitud del impacto estimado siempre se encuentra entre un 10 y un 15% (Blais y Carty, 1990; Blais y Dobrzynska, 1998; Franklin, 1996, 2004; Blais y Aarts, 2005). “El voto obligatorio incrementa la participación” puede constituir una proposición bien fundamentada.

El argumento anterior genera más preguntas. ¿La legislación que hace obligatorio el voto debería acompañarse de sanciones para ser más eficiente? ¿Qué tipos de sanciones son más susceptibles de inducir a los ciudadanos recalcitrantes a ir a votar? ¿Cuán “duras” deben ser estas sanciones? ¿Hasta qué punto deberían aplicarse de un modo estricto? La literatura ofrece una información singularmente escasa para responder a estas preguntas.

Quizás se puede aprender más de las democracias no consolidadas. Norris (2002) descubrió que el voto obligatorio solamente incrementaba la participación electoral en democracias “de edad avanzada”, y especulaba con que la ley podría ser aplicada menos rígidamente en otros países o que su impacto estaría condicionado por la presencia de normas más amplias sobre lo deseable de obedecer las normas. Fornos *et al.* (2004) desarrollan una escala de obligatoriedad del voto de cuatro puntos y presentan datos sobre

el poderoso efecto del voto obligatorio en América Latina, la región con una mayor frecuencia de leyes que obligan a votar. Sin embargo, este trabajo no distingue la contribución específica de las sanciones y de su nivel de aplicación real. Finalmente, Blais *et al.* (2003) examinan el efecto del voto obligatorio con y sin sanciones en una muestra de 61 países, que cubre tanto las democracias jóvenes como las consolidadas. Descubren que el voto obligatorio sólo marca la diferencia cuando existen sanciones (no se examina el efecto de la aplicación).

En resumen, sabemos que la obligatoriedad del voto incrementa la participación electoral y que su impacto depende de la aplicación de la norma. Pero no sabemos hasta qué punto la aplicación debe ser estricta para que funcione. No sabemos nada sobre la consciencia y la percepción de la ley y su implementación por parte de los ciudadanos. Y no existen análisis comparativos sobre los determinantes de la participación electoral en países con o sin voto obligatorio. Se trata de una situación desafortunada. Si el sentido del deber es una motivación crucial a la hora de votar (Blais, 2000), la mayoría de la gente debería estar predispuesta a votar y, si el voto se impusiera de una forma moderada, bastaría con multas de baja cuantía para obtener una participación electoral elevada. Asimismo, de acuerdo con la teoría de la elección racional, los factores que determinan la decisión de votar o no votar deberían ser muy distintos cuando existe un coste monetario concreto asociado a la abstención. En pocas palabras, no sabemos nada sobre los microfundamentos de la obligatoriedad del voto (Achen, 2002, véase también Bilodeau y Blais, 2005).

Sistema electoral

Jackman (1987) descubrió que la participación electoral era mayor en aquellos sistemas con distritos competitivos a nivel nacional, ya que en distritos de grandes dimensiones los partidos tienen incentivos para movilizarse en todas partes, mientras que en algunos distritos uninominales algunos partidos pueden ser descartados al no tener esperanzas de victoria.

La variable ordinal de cuatro categorías de Jackman tiene en cuenta la fórmula electoral y el tamaño de los distritos. Investigaciones posteriores han utilizado la misma variable, o bien variables *dummy* (dicotómicas) que distinguen entre fórmulas electorales o índices compuestos de no proporcionalidad (también incluidos por Jackman). Los estudios limitados a democracias consolidadas (Blais y Carty, 1990; Jackman y Miller, 1995; Franklin, 1996; Radcliff y Davis, 2000), así como un estudio de la participación electoral en países postcomunistas (Kostadinova, 2003), han confirmado que la participación electoral es mayor cuando hay representación proporcional (RP) o distritos de mayor tamaño, mientras que las investigaciones sobre América Latina no han encontrado asociación (Pérez-Liñán, 2001; Fornos *et al.* 2004), y un análisis que incluye tanto democracias consolidadas como no consolidadas concluye que el sistema electoral tiene

un efecto débil (Blais y Dobrzyńska, 1998). Véase Blais y Aarts (2005) para una revisión más detallada de estos estudios.

Los datos disponibles pueden interpretarse de dos formas distintas. La visión más optimista considera que la RP incrementa la participación excepto, quizás, en América Latina, una región en la que existe cierta dosis de proporcionalidad en cada país. La visión más pesimista establece que una vez se sale de Europa no existe una correlación generalizada entre el sistema electoral y la participación. Me inclino hacia la segunda postura, más escéptica. Por una parte, el estudio de Fornos *et al.* (2004) que obtuvo resultados negativos en América Latina es, como mínimo, tan sofisticado metodológicamente como la investigación sobre las democracias consolidadas. Por otra parte, como indico más adelante al analizar el impacto de los sistemas de partidos, aquellos estudios que tienen resultados positivos han sido incapaces de especificar cómo y por qué la RP fomenta la participación electoral.

Unicameralismo

La última variable institucional clave de Jackman (1987) es el unicameralismo. Muestra que la participación electoral es significativamente mayor en los países en que el poder se concentra en una sola cámara parlamentaria. La razón radica en que, cuando hay dos cámaras, el poder suele repartirse entre las dos y “las elecciones a la cámara baja desempeñan un papel menos decisivo en la producción de legislación ahí donde existe un fuerte bicameralismo” (Jackman, 1987: 408). Cuanto más poder tiene el cuerpo elegido, mayor es el incentivo para votar. Cabría esperar que la participación electoral fuera especialmente baja en aquellos casos en que la cámara legislativa tiene poco poder. Jackman emplea una escala (propuesta por Lijphart [1984]) con la mayor puntuación en los países unicamerales y la menor en los países en los cuales la cámara alta ostenta tanto poder como la cámara baja.

Jackman se centró en la división de poderes entre las cámaras alta y baja, pero el mismo razonamiento debería aplicarse a la división de poderes entre el presidente y el legislativo, entre el gobierno central y los subnacionales (o supranacionales) o entre el gobierno y los tribunales. La proposición general consiste en que cuanto más poder tiene el cuerpo objeto de elecciones, mayor es la participación.

De un modo quizás sorprendente, los hallazgos sobre el impacto del unicameralismo en la participación electoral son contradictorios. Jackman (1987), Jackman y Miller (1995) y Fornos *et al.* (2004) ofrecen resultados positivos. Sin embargo, Blais y Carty (1990), Black (1991), Radcliff y Davis (2000) y Pérez-Liñán (2001) no indican que tenga efecto alguno. Siaroff y Merer (2002) encuentran datos que respaldan la hipótesis según la cual la participación es menor donde hay un presidente “relevante” elegido por sufragio directo y donde hay gobiernos regionales fuertes. Blais y Carty (1990) y Black

(1991) indican que la participación no es mayor en países federales. Con todo, aquellos estudios que han analizado los indicadores específicos sobre el poder relativo de las cámaras bajas en relación con otras instituciones no han confirmado de un modo sistemático el argumento propio de la *sabiduría convencional* de que la participación es mayor cuando la cámara baja tiene mayor capacidad de influencia.

Quizás lo necesario es un indicador que resuma el “poder” de las cámaras bajas nacionales que tenga en cuenta estas muchas dimensiones. Blais y Dobrzynska (1998) crearon una escala de “decisividad electoral” que toma en consideración la presencia o ausencia de elecciones subnacionales en federaciones, la elección directa de la cámara alta en países bicamerales y las elecciones presidenciales directas. Descubrieron una fuerte correlación positiva de esta variable con la participación electoral, pero sus resultados no se han repetido.

Franklin (2004) prestó mucha atención a la responsabilidad parlamentaria en su explicación del cambio en la participación electoral en democracias consolidadas. El principal empeño de Franklin es explicar por qué la participación se incrementa o se reduce con el paso del tiempo en diferentes países. Su variable clave es la competitividad, que tendré en cuenta más adelante. También sostiene que la participación en las elecciones legislativas crece cuando crece la responsabilidad parlamentaria y decrece cuando la responsabilidad parlamentaria se debilita. El primer fenómeno queda ejemplificado por la independencia de Malta en los años sesenta del pasado siglo y la decisión del legislativo de dejar de someterse a la ratificación de un gobernador nombrado por los británicos. La creación de un cártel de gobierno en Suiza después de los años sesenta, que despojó a las elecciones de sentido, ilustra el segundo fenómeno.

Cuesta creer que la participación electoral no se vea afectada por la importancia de una institución. No obstante, los datos empíricos al respecto son ambiguos. El reto consiste en elaborar escalas fiables que capten las diferentes dimensiones de dicha importancia. Las medidas empleadas en las investigaciones existentes no resultan demasiado satisfactorias.

Otras variables institucionales

Al menos otros dos factores institucionales han demostrado tener efecto en la participación: la edad mínima para votar y las normas orientadas a facilitar el voto. El que la propensión a votar se incrementa con la edad es un hecho comprobado (Wolfinger y Rosenstone, 1980; Blais, 2000), así que cabría esperar que la participación fuera más reducida cuando la edad mínima para votar es de 18 años en lugar de 21. Las investigaciones que analizan la participación en democracias avanzadas contemporáneas no incorporan esta variable por la sencilla razón de que la edad mínima para votar ya es de 18 años en casi todas partes (Massicotte *et al.*, 2004), por lo que no hay variación.

Blais y Dobrzynska (1998), cuya muestra de elecciones empieza en los años setenta, incluyen una variable sobre la edad mínima para votar que muestra un efecto poderoso; sus resultados indican que reducir la edad mínima de los 21 a los 18 años reduce la participación en cinco puntos porcentuales. La edad para votar resulta también un factor clave en el estudio de las dinámicas de la participación de Franklin (2004). Calcula que la reducción de la edad mínima para votar ha producido en la mayoría de las democracias una reducción de tres puntos porcentuales en la participación.

La evidencia del efecto de las normas facilitadoras del voto es más limitada y ambigua. El análisis inicial de Franklin (1996) indica que la participación es mayor cuando los comicios tienen lugar en domingo, ya que la gente tiene más tiempo para acudir al colegio electoral, así como si está permitido el voto por correo (en ausencia). Pero estas mismas variables se han mostrado incapaces de predecir cambios en la participación a lo largo del tiempo (Franklin, 2004). Norris (2002) examina el efecto de normas específicas (número de días de elecciones, elecciones en un día festivo, voto por correo, voto por delegación, cabinas para votar adaptadas, traslado del voto y voto por adelantado) sin encontrar efectos significativos. Blais *et al.* (2003) crearon una escala-resumen que reflejaba la presencia o ausencia de voto postal, por adelantado y por delegación, y descubrieron una asociación positiva bastante intensa entre la presencia de estas iniciativas facilitadoras del voto y la participación.

Resulta razonable asumir que la gente es más susceptible de votar si es fácil hacerlo. Gimpel y Schucknecht (2003), en especial, han mostrado que la participación se ve afectada por la accesibilidad de las urnas. De un modo similar, hay muchas pruebas de que permitir el voto por correo incrementa la participación (Southwell, 2004; Rallings y Thrasher, 2006). La cuestión no es si las facilidades para votar influyen en la participación sino, más bien, cuáles son más importantes y hasta qué punto marcan la diferencia. Para afrontar estas cuestiones correctamente, necesitamos unos indicadores más adecuados sobre dichas facilidades a lo largo del tiempo y en diferentes países. Por lo tanto, no basta con saber si éstas existen, sino también hasta qué punto resulta sencillo beneficiarse de ellas. También es necesario tener en cuenta la endogeneidad de las leyes electorales; posiblemente es más probable que se implementen medidas para facilitar el voto en países donde la participación es baja o está en declive (Franklin, 2004: 148). No es tarea fácil. Por el momento, el veredicto debe ser que sabemos poco sobre el efecto que tienen estas normas.

Conclusiones

El principal objeto de atención para los estudios de la participación en varios países lo ha constituido el impacto de las variables institucionales. Este impulso estuvo en gran parte condicionado por el influyente artículo de Jackman. La percepción general en este

campo (y, debo confesarlo, también mi propia visión antes de reexaminar los datos con mayor atención al preparar este artículo) es que las diferencias de participación entre países podían explicarse relativamente bien por las variables institucionales. La percepción es que hemos dado con varias proposiciones consolidadas sobre cómo las instituciones influyen en la participación.

Pero esta percepción puede no estar bien fundamentada. Podemos afirmar con seguridad que el voto obligatorio incrementa la participación electoral, pero no sabemos si basta con una ligera sanción o si dicha sanción debe ser impuesta. La mayor parte de la literatura respalda el punto de vista según el cual la RP fomenta la participación, pero se carece de una explicación convincente sobre el cómo y el porqué, y el patrón es ambiguo cuando el análisis va más allá de las democracias altamente consolidadas. Muchos estudios sostienen la proposición de sentido común según la cual la participación se incrementa con la importancia de las elecciones, pero son muchos los estudios que no constatan efecto alguno. Es difícil no creer que la participación sea mayor en aquellas elecciones en las que es relativamente fácil votar, pero los datos empíricos sobre el efecto de las iniciativas facilitadoras del voto no arrojan resultados coherentes. Con todo, nuestros conocimientos sobre el impacto de las instituciones en la participación dejan mucho que desear.

EL CONTEXTO ECONÓMICO

Sabemos que a nivel individual la propensión a votar se encuentra asociada a varias características sociodemográficas y especialmente a la edad y la educación (Wolfinger y Rosenstone, 1980; Blais, 2000). Sería natural asumir, del mismo modo, que las variaciones transnacionales de la participación están asociadas a las diferencias socioeconómicas entre países. Powell (1982) analiza el impacto del contexto socioeconómico y descubre que la participación tiende a ser superior en los países económicamente más desarrollados. También expone que la participación tiende a ser mayor en países pequeños, pero la relación carece de significatividad estadística.

A partir de entonces, los análisis más influyentes han descuidado esta línea de análisis (véanse especialmente Jackman, 1987 y Franklin, 1996, 2004), quizás porque tratan un número pequeño de democracias consolidadas entre las cuales hay poca varianza en el nivel de desarrollo económico. Sin embargo, la hipótesis de que la participación electoral es mayor en países económicamente avanzados goza de un fuerte apoyo (Blais y Dobrzynska, 1998; Norris, 2002; Fornos *et al.*, 2004). La relación no es lineal y la principal diferencia tiene lugar entre los países más pobres y todos los demás (Blais y Dobrzynska, 1998).

Por lo tanto, surge la pregunta de si la participación electoral aumenta o se reduce con el deterioro de la economía. Como apunta Radcliff (1992), ambos efectos son posi-

bles. Los problemas económicos pueden llevar a la gente a movilizarse para enmendar agravios, pero también pueden llevarla a retirarse por completo del proceso político. Debido a estas dos posibilidades contradictorias, el resultado más probable es un efecto total inexistente, y éste es precisamente el que presentan la mayoría de los estudios (Arcelos y Meltzer, 1975; Blais y Dobrzynska, 1998; Blais, 2000; Kostadinova, 2003; Fornos *et al.*, 2004; como excepción, véase Rosenstone, 1982).

Radcliff (1992) sostiene que las crisis económicas incrementan la participación electoral con niveles altos o bajos de gasto en bienestar, pero la reducen en niveles intermedios. Sin embargo, algunos de los hallazgos resultan desconcertantes (Blais, 2000: 34) y no han podido repetirse (Jackman y Miller, 1995, Apéndice B, nota 3). Hay que concluir que no existe una relación clara entre la coyuntura económica y la participación electoral.

En mi propia investigación, me ha sorprendido el hecho de que los mayores niveles de participación se encuentran en países pequeños como Malta (Blais y Carty, 1990; Blais y Dobrzynska, 1998). La verdadera diferencia tiene lugar entre los países muy pequeños y el resto, y el patrón está menos claro a nivel subnacional (véase Blais, 2000: 59). Se ha observado el mismo patrón en el ámbito local (Oliver, 2000). He especulado sobre que esto podría ser el resultado de la mayor densidad de las redes sociales en comunidades más pequeñas, pero esta hipótesis no es coherente con la ausencia de correlación entre la participación electoral y la urbanización (véase Siaroff y Merer, 2002; Fornos *et al.*, 2004; Kostadinova [2003] muestra una correlación negativa, pero resulta bastante débil). También puede interpretarse que en un país pequeño es más probable que los votantes consideren que su voto podría ser decisivo. Una interpretación alternativa, la que encuentro más plausible (aunque se contradiga con Rose, 2004), consiste en que los países pequeños tienen menos electores por representante electo, lo que facilita a los candidatos y partidos la movilización del voto.

No resulta sorprendente que los expertos en ciencia política hayan prestado más atención al impacto de las instituciones que al efecto del contexto socioeconómico. No obstante, las investigaciones existentes muestran que la participación electoral es sustancialmente inferior en países pobres y excepcionalmente elevada en países excepcionalmente pequeños. Se han presentado pocos patrones consistentes más. Dada la coherencia del modelo de recursos en el campo de la participación política (Brady *et al.*, 1995), cabría esperar que existieran más análisis sistemáticos de cómo la pobreza o el analfabetismo afectan a la participación electoral.

LOS SISTEMAS DE PARTIDOS Y LOS RESULTADOS ELECTORALES

El análisis inicial de Powell (1982) indicaba que la participación electoral era superior en países con vínculos fuertes entre los grupos sociales y los partidos. Este hallazgo no se reprodujo en Jackman (1987) y los estudios posteriores han excluido esta

variable. Jackman introdujo una nueva variable, el número de partidos, que hoy en día se incluye en la mayoría de las investigaciones.

La intuición consiste en que la participación electoral debería ser mayor cuanto mayor fuera el número de partidos, al menos por dos razones. En primer lugar, los votantes tienen más opciones entre las que elegir. Cuando hay seis o siete partidos en lugar de dos o tres, es más probable que los votantes encuentren un partido cuyo programa se encuentre razonablemente cerca de sus propios puntos de vista acerca de los principales temas de la campaña y deberían estar menos inclinados a pensar que ninguna de las opciones es satisfactoria. En segundo lugar, cuanto mayor es el número de partidos, mayor es la movilización electoral.

Como apunta Jackman, el fraccionamiento de los partidos también puede tener consecuencias negativas en la participación electoral. Cuanto mayor es el número de partidos, mayor es la probabilidad de que el gobierno esté formado por una coalición de partidos. En sistemas con gobiernos de coalición, los resultados electorales son menos decisivos, ya que la composición final del gobierno depende de los acuerdos que los partidos estén dispuestos (o no) a suscribir. La presencia de muchos partidos puede significar que los votantes tengan poca relevancia en la verdadera elección del gobierno (Downs, 1957).

Dada la posibilidad de que existan estas consecuencias contradictorias, no queda claro si deberíamos esperar que la correlación de la participación electoral con el número de partidos fuera positiva, negativa o inexistente. Además, no está claro si es el número de partidos *per se* lo que cuenta. Si lo que importa es hasta qué punto el resultado de las elecciones es decisivo, debería prestarse atención a la presencia o ausencia (anticipadas) de pactos postelectorales y la principal distinción podría establecerse entre las elecciones que producen gobiernos monocolor de mayoría (que son decisivas) y aquellas que producen gobiernos de minoría o de coalición.

Casi toda la investigación empírica ha constatado una correlación negativa entre el número de partidos y la participación electoral (Jackman, 1987; Blais y Carty, 1990; Jackman y Miller, 1995; Blais y Dobrzynska, 1998; Radcliff y Davis, 2000; Kostadinova, 2003). La única excepción la representan los estudios sobre la participación en Latinoamérica, donde parece no existir relación alguna (Pérez-Liñán, 2001; Fornos *et al.*, 2004).

Se trata de un hallazgo desconcertante. Parece que implica que las personas no están más inclinadas a votar cuando (y donde) hay más opciones entre las que elegir o que la movilización promovida por los partidos no es demasiado importante (o que la llegada de un nuevo partido no incrementa el nivel general de movilización). Además, la usual interpretación de que un mayor número de partidos reduce la participación electoral porque produce gobiernos de coalición (y por lo tanto las elecciones son menos decisivas) no goza de respaldo empírico. Blais y Carty (1990) y Blais y Dobrzynska (1998) muestran que la participación no es mayor en elecciones que producen gobiernos de mayoría de un solo partido.

En definitiva, nuestro conocimiento sobre la relación entre el número de partidos y la participación electoral es deficiente. Hay que rechazar la simple intuición de que tener más partidos promueve la participación. Éste es un importante hallazgo “en negativo”. La RP o un mayor tamaño de los distritos electorales incrementan el número de partidos (Taagepera y Shugart, 1989; Blais y Carty, 1991; Lijphart, 1994; Cox, 1997). Podemos decir que si la RP promueve la participación, no se debe a que produzca un número mayor de partidos. Como no sabemos con exactitud cómo y por qué la RP afecta a la participación, es decir, no entendemos los microfundamentos (Achen, 2002), la interpretación pesimista de que no existe una correlación generalizada entre el sistema electoral y la participación parece justificada.

También es el momento de cuestionar la interpretación estándar de que la frecuentemente observada correlación negativa entre el número de partidos y la participación refleja el impacto de la decisividad de las elecciones. Esta interpretación debe ser puesta a prueba directamente, lo que comporta el desarrollo de indicadores de decisividad electoral. Dichos indicadores han sido empleados en otras líneas de investigación (véase, especialmente, Powell y Whitten, 1993). Puede que necesiten ser enmendados o refinados, pero deberían incluirse en estudios futuros. También podría defenderse que lo que realmente importa es la claridad de la decisión, es decir, que los votantes necesitan conocer con una certeza relativa qué coaliciones podrían formarse. Si éste es el proceso que se presume, deben construirse indicadores sobre la claridad de la decisión. Tal y como están las cosas, el hecho de que la participación aparentemente sea menor cuando hay más partidos resulta contraria a la intuición y la suposición de que es menor porque la existencia de más partidos comporta que las elecciones son menos decisivas no es más que eso: una suposición. Tampoco creo que la interpretación de que el número de partidos incrementa los costes de informarse sea demasiado plausible. Los votantes no tienen que informarse por sí mismos sobre cada partido. Los costes de informarse pueden incrementarse, sin embargo, cuando el sistema de partidos se encuentre en cambio constante.

Existe una variable final que no se incluyó en los trabajos pioneros de Powell y Jackman, pero que ha sido incorporada en muchos estudios posteriores: la competitividad (del resultado) electoral. Esta variable ha producido los hallazgos más coherentes. Mi anterior resumen de los datos sigue mostrándose válido: “el veredicto está tan claro como el agua en lo relativo a la competitividad electoral: se ha demostrado que la competitividad incrementa la participación electoral en 27 de los 32 estudios que han analizado esta relación, en varios contextos y con diversas metodologías. Existen poderosas razones para creer que, tal y como predice la teoría de la elección racional, vota más gente cuando las elecciones están reñidas” (Blais, 2000: 60). Éste es el resultado más firmemente consolidado en la literatura. No veo razones por las que este hallazgo pudiera estar equivocado.

Ello no significa que este debate esté cerrado. No basta con decir que la competitividad fomenta la participación electoral; hay que especificar la magnitud de su influen-

cia. En mi propia investigación, me ha sorprendido su reducido efecto. Mi análisis internacional indica que la participación se ve reducida en uno o dos puntos (porcentuales) cuando la diferencia entre el partido más votado y el segundo se incrementa en 10 puntos (porcentuales) (Blais y Dobrzynska, 1998). Surgen patrones muy similares en análisis transversal sobre la participación a nivel de distrito (Loewen y Blais, no publicado)¹ y en estudios con series temporales de la participación en las elecciones generales en Canadá (Nevitte *et al.*, 2000).

Es posible que el impacto de la competitividad esté infravalorado por no haberse medido la variable adecuadamente. El indicador estándar consiste en la diferencia de votos entre el partido más votado y el segundo. El indicador tiene sentido, aunque no queda claro si lo importante es la diferencia en votos o en escaños. Personalmente, considero que es la diferencia de votos, ya que los votantes reciben mucha información sobre la intención de voto a través de las encuestas y muchos tienen escasos conocimientos sobre cómo se traducen los votos en escaños. En sistemas con gobiernos de coalición, lo importante puede ser lo reñido de la competición entre las dos principales coaliciones. Hay que construir indicadores más complejos. Además, siempre se asume que la relación entre la competitividad y la participación electoral es lineal. Podría ser que lo principal fuera que el resultado de las elecciones no estuviera decidido de antemano y que la diferencia real se estableciera entre las elecciones en las que el ganador vence por un amplio margen y todas las demás. O quizás se trata simplemente de que las elecciones reñidas animan a los votantes e incrementan la participación.

Los estudios internacionales suelen analizar la competitividad general en las elecciones generales. Pero podría ser que lo importante fuera la competitividad de la contienda a nivel de distrito. Franklin (2004) emplea el margen medio de victoria a nivel de distrito como indicador de competitividad y está claro que es un camino que vale la pena explorar. No debería asumirse, sin embargo, que la competitividad debe ser medida solamente a nivel de distrito. En un análisis de la decisión de voto de los individuos en las elecciones de la Columbia Británica en 1996 descubrimos que la competitividad percibida de la contienda a nivel provincial tenía un impacto mayor que la competitividad percibida a nivel de distrito (Blais *et al.*, 2000).

Finalmente, está la cuestión de si la competitividad es relevante en los sistemas de RP. Franklin (2004) adopta un punto de vista radical consistente en que el margen de victoria sólo tiene importancia en los sistemas mayoritarios. Puede que tenga razón, pero se trata de una proposición empírica que debería ser puesta a prueba directamente. La cuestión más difícil es si la competitividad de la contienda debería medirse del mismo modo en diferentes sistemas electorales. El margen de la victoria es el indicador

1. P. J. Loewen y A. Blais. 2005. *Did C-24 Affect Voter Turnout? Evidence from the 2000 and 2004 elections*. Mecanografiado.

lógico en sistemas mayoritarios porque la probabilidad de emitir un voto decisivo está directamente relacionada con el margen de la victoria. En un sistema de RP, sin embargo, a veces el resultado es totalmente previsible de antemano aunque sea por poco margen. En un distrito de cinco escaños, por ejemplo, puede resultar obvio para los votantes que el partido A y el partido B van a ganar 2 escaños cada uno y el partido C uno (podría haber sido el resultado de las tres elecciones anteriores), aunque la ventaja del partido A sobre el B pueda ser minúscula. Este resultado sería codificado como “muy competitivo”, pero la probabilidad de emitir un voto decisivo podría ser tan reducida como en un distrito uninominal “no competitivo”. La probabilidad de emitir un voto decisivo es minúscula tanto en sistemas RP como en sistemas mayoritarios. Hay que reflexionar concienzudamente sobre qué significa realmente la cercanía entre partidos o la competitividad en sistemas de RP.

Pautas para las futuras investigaciones

El punto de vista predominante en este campo es que las variaciones internacionales de la participación electoral pueden explicarse mayoritariamente a través de factores institucionales que hacen que algunas elecciones sean más relevantes y competidas que otras. Esta visión queda perfectamente expresada por Franklin (1996: 232): “Un país con elecciones poco relevantes y un sistema electoral que no fuera demasiado proporcional podía mostrar con facilidad niveles de participación de un 40% [*sic*; debería decir ‘unos 40 puntos porcentuales’] por debajo de un país con elecciones muy relevantes y un sistema altamente proporcional. Dichas diferencias surgen, puramente, de las diferencias del contexto institucional en el que tienen lugar las elecciones”.

No me resulta convincente. Como ya indiqué con anterioridad, la evidencia de que la participación electoral es mayor con RP (lo que se supone que produce resultados más competitivos) y en elecciones más “importantes” está lejos de resultar robusta. La evidencia sobre el efecto de la competitividad es coherente, pero dicho efecto parece sorprendentemente débil. Las instituciones importan menos de lo que tendemos a creer. Su impacto se ve condicionado por la presencia de otros factores.

Para desentrañar estas relaciones más complejas, debemos reconsiderar nuestros diseños de investigación y metodologías. El enfoque estándar en este campo ha consistido en un análisis transversal de las variaciones de la participación entre países. Este enfoque es apropiado para aislar el efecto de las variables que tiendan a ser estables con el transcurso del tiempo, como el entorno socioeconómico o el sistema electoral o el voto obligatorio. El reto consiste en incluir más casos, ya que el número de democracias crece, así como en poner a prueba la robustez de los hallazgos observados entre las democracias consolidadas.

Sin embargo, muchas variables difieren de unas elecciones a otras, y en su caso el análisis debería ser explícitamente dinámico. En su revolucionario trabajo *Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945*, Franklin (2004) se enfrenta a la cuestión de las variables cambiantes y apunta con claridad en qué dirección debe evolucionar la investigación futura (véase también Franklin *et al.*, 2004). Franklin sostiene dos argumentos cruciales. En primer lugar, el modo lógico de establecer el impacto de una variable en la participación electoral es examinar si la participación se incrementa o se reduce cuando dicha variable cambia. En otras palabras, el análisis debería ser dinámico. En segundo lugar, el impacto de cualquier cambio debería dejarse notar en su mayor parte en las nuevas cohortes, que todavía no han desarrollado el hábito de votar (o abstenerse).

Este enfoque lleva a Franklin a elaborar análisis empíricos en los que los niveles previos de participación se incluyen como variable de control, haciendo el análisis explícitamente dinámico. Franklin también crea variables de interacción entre los factores institucionales y la proporción de nuevos votantes en el electorado (afrentando una de sus tres primeras elecciones). En algunos casos, también emplea cohortes como unidad de análisis, lo que le permite poner a prueba directamente la hipótesis de que las variables institucionales tienen un efecto más poderoso sobre las cohortes más jóvenes.

Se trata de un logro impresionante. Franklin (2004) nos ha retado a revisar nuestro modo de poner a prueba las hipótesis sobre la influencia de las instituciones o los sistemas de partidos en la participación electoral. Sin embargo, su análisis tiene tres defectos graves. En primer lugar, Franklin omite los principales efectos asociados a las cohortes más jóvenes de sus estimaciones por la presencia multicolinealidad. No resulta una justificación convincente. Brambor *et al.* (próxima publicación) muestran que cuando el modelo teórico contiene efectos de interacción, todos los términos constitutivos deben ser incluidos y que los problemas asociados a la multicolinealidad han sido muy sobrevalorados. En segundo lugar, Franklin se refiere con frecuencia a cómo afecta a la participación el reemplazo generacional, pero limita su análisis a las consecuencias de la entrada de nuevas cohortes al electorado. No trata la crucial y difícil cuestión de si las nuevas cohortes votan menos porque entran en la política en un contexto menos competitivo (su argumento) o porque pertenecen a otra generación con un conjunto distinto de valores (Blais *et al.*, 2004). En tercer lugar, el tipo de modelo propuesto por Franklin exige el uso de análisis multinivel, en el cual las características de los votantes interactúan con las características del contexto electoral.

A pesar de estos inconvenientes, Franklin ha establecido el nuevo rumbo que debe seguir la investigación en este campo. Debe prestarse más atención a las dinámicas de la participación electoral, debe analizarse cómo los cambios en el sistema de partidos o la competitividad de las elecciones influyen en la participación y habría que comprobar explícitamente si estos factores tienen un impacto mayor sobre las cohortes más jóvenes.

nes. En este sentido, el libro de Franklin constituye un estudio tan pionero como los trabajos de Powell y Jackman hace 20 años.

El argumento principal de Franklin, que coincide con el punto de vista dominante en el campo, consiste en que el nivel de competencia electoral es el determinante más crucial de la participación electoral. Sigo siendo escéptico. Como se ha indicado antes, la participación sólo se ve afectada débilmente por la competitividad de las elecciones. Las elecciones extremadamente reñidas suelen “impulsar” la participación en unos pocos puntos porcentuales. Además, no he encontrado datos que demuestren que sistemáticamente las elecciones se están volviendo menos competidas con el paso del tiempo, así que el reciente descenso de la participación electoral difícilmente puede atribuirse a la falta de competitividad.

Franklin nos alerta sobre la posibilidad de que el impacto de las características institucionales pueda variar dependiendo del tipo de votantes. También hay que examinar la posibilidad de que sus efectos cambien dependiendo del sistema. Por ejemplo, la participación puede estar relacionada de un modo distinto con el número de partidos o la competitividad de las elecciones en países con o sin RP. De un modo similar, lo que incrementa o reduce la participación puede ser muy distinto en países ricos y pobres. Dado que el número de democracias y elecciones democráticas crece a buen ritmo, en la actualidad es posible analizar los efectos de interacción entre el contexto socioeconómico, las variables institucionales y los sistemas de partidos y diferenciar entre los patrones generales presentes en todas partes y los patrones condicionales que tienen lugar solamente en contextos específicos.

CONCLUSIÓN

Los estudios comparativos de la participación electoral en varios países han presentado varios hallazgos robustos. Podemos afirmar con confianza que la participación es menor en los países pobres y mayor en los países pequeños, que el voto obligatorio fomenta la participación y que ésta se incrementa cuando las elecciones están muy reñidas. Pero me impresiona más lo que todavía no sabemos. Tenemos un conocimiento deficiente de cómo fomenta la participación el voto obligatorio y una escasa comprensión de hasta qué punto la competencia es importante y qué efectos tiene en sistemas de RP. Tiene sentido pensar que la participación es menor en elecciones menos relevantes, pero qué hace que unas elecciones sean más o menos relevantes sigue siendo un enigma.

Podemos hacerlo mejor. Gracias a la rápida expansión del número de democracias y el número de elecciones democráticas, podemos poner a prueba nuestras hipótesis con más casos y con una varianza mayor tanto en la variable dependiente como en la independiente. Ello significa que debemos ir más allá de las democracias consolidadas y

comprobar si los patrones que observamos en ellas se sostienen en las nuevas democracias. Es por ello que el trabajo de Fornos *et al.* (2004), que analiza algunas hipótesis estándar sobre los determinantes de la participación electoral en un nuevo contexto (Latinoamérica), es tan útil e importante. Si parece que algunos factores, como el sistema electoral o el tamaño del distrito, tienen efectos solamente en algún subconjunto de países, debería desarrollarse una teoría más compleja sobre dónde y cuándo importan más o menos. O bien habría que llevar a cabo análisis adicionales para comprobar si dicha aparente relación es espuria.

Gracias a la llegada de bases de datos como el *Comparative Study of Electoral Systems* [Estudio Comparativo de Sistemas Electorales], también es posible analizar el impacto condicional de las instituciones en distintos tipos de votantes (véase, por ejemplo, Long y Shively, 2005). Se abre así un camino fascinante para la investigación. Tanto Franklin (2004) como Gerber *et al.* (2003) y Plutzer (2002) han afirmado que en el voto existe un importante componente de hábito. Si tienen razón, sería de esperar que los factores contextuales tuvieran un efecto mucho mayor en las nuevas cohortes. Lógicamente, ello exige un análisis multinivel que vincule las variables institucionales con las características individuales de los votantes.

Referencias

- Achen, Ch. 2002. «Toward a new political methodology: microfoundations and ART», *Annu. Rev. Polit. Sci.*: 423-50.
- Arcelus, F. J. y A. H. Meltzer. 1975. «The effect of aggregate economic variables on congressional elections», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 69: 1232-65.
- Bilodeau, A. y André Blais. 2005. *Le vote obligatoire a-t-il un effet de socialisation politique?* Presentado en el Colloque int. vote obligatoire, Inst. d' Études Polit. Lille, Oct. 20-21.
- Black, J. H. 1991. «Reforming the context of the voting process in Canada: lessons from other democracies», en H. Bakvis, ed. *Voter Turnout in Canada*, Toronto: Dundurn: 61-176.
- Blais, A. 1991. «The debate over electoral systems», *Int. Polit. Sci. Rev.*, 12: 239-60.
- Blais, A. 2000. *To Vote Or Not To Vote? The Merits and Limits of Rational Choice*. Pittsburgh: Univ. Pittsburgh Press.
- Blais, A. y K. Aarts. 2005. *Electoral system and turnout*. Presentado en Int. Expert Meet. «Changing the Electoral System: The Case of the Netherlands», Amsterdam, Sept. 14-15.
- Blais, A. y K. Carty. 1990. «Does proportional representation foster voter turnout?», *Eur. J. Polit. Res.*, 18: 167-81.

- Blais, A. y K. Carty. 1991. «The psychological impact of electoral laws: measuring Duverger's elusive factor», *Br. J. Polit. Sci.*, 21: 79-93.
- Blais, A. y A. Dobrzynska. 1998. «Turnout in electoral democracies», *Eur. J. Polit. Res.*, 33: 239-61.
- Blais, A., E. Gidengil, N. Nevitte y R. Nadeau. 2004. «Where does turnout decline come from?», *Eur. J. Polit. Res.*, 43: 221-36.
- Blais, A., L. Massicotte y A. Dobrzynska. 2003. *Why is Turnout Higher in Some Countries than in Others?* Ottawa: Elections Canada.
- Blais, A., R. Young y M. Lapp. 2000. «The calculus of voting: an empirical test», *Eur. J. Polit. Res.*, 37: 181-201.
- Brady, H. E., K. Verba y L. Schlozman. 1995. «Beyond SES: a resource model of political participation», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 89: 271-95.
- Brambor, T., W. Roberts Clark y M. Golder. 2006. «Understanding interaction models: improving empirical analyses», *Polit. Anal.*, 14: 63-82.
- Cox, G. W. 1997. *Making Votes Count*. Nueva York/Londres: Cambridge Univ. Press.
- Downs, A. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. Nueva York: Harper.
- Fornos, C. A., T. J. Power y J. C. Garand. 2004. «Ex-plaining voter turnout in Latin America, 1980 to 2000», *Comp. Polit. Stud.*, 37(8): 909-40.
- Franklin, M. 1996. «Electoral participation», en L. LeDuc, R. G. Niemi y P. Norris, eds. *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, Beverly Hills, California: Sage: 216-35.
- Franklin, M. 2004. *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945*. Cambridge, RU: Cambridge Univ. Press.
- Franklin, M., P. Lyons y M. Marsh. 2004. «Generational basis of turnout decline in established democracies», *Acta Polit.*, 39: 115-51.
- Gerber, A. S., D. P. Green y R. Shachar. 2003. «Voting may be habit-forming», *Am. J. Polit. Sci.*, 47: 540-50.
- Gimpel, J. G. y J. E. Schuknecht. 2003. «Political participation and the accessibility of the ballot box», *Polit. Geogr.*, 22: 471-88.
- Jackman, R. W. 1987. «Political institutions and voter turnout in industrial democracies», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 81: 405-24.
- Jackman, R. W. y R. A. Miller. 1995. «Voter turnout in the industrial democracies during the 1980s», *Comp. Polit. Stud.*, 27(4): 467-92.
- Kostadinova, T. 2003. «Voter turnout dynamics in post-Communist Europe», *Eur. J. Polit. Res.*, 42(6): 741-59.
- Lijphart, A. 1994. *Electoral Systems and Party Systems*. Oxford, UK: Oxford Univ. Press.
- Lijphart, A. 2000. «Turnout», en R. Rose, ed. *International Encyclopedia of Elections*, Washington, DC: CQ Press: 314-22.

- Long, J. K. y W. P. Shively. 2005. «Applying a two-step strategy to the analysis of cross-national public opinion data», *Polit. Anal.*, 13: 327-44.
- Massicotte, L. y A. Blais. 1999. «Mixed electoral systems: a conceptual and empirical survey», *Elect. Stud.*, 18: 341-66.
- Massicotte, L., A. Blais y A. Yoshinaka. 2003. *Establishing the Rules of the Game: Election Laws in Democracies*. Toronto: Univ. Toronto Press.
- McDonald, M. P. y P. Samuel. 2001. «The myth of the vanishing voter», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 95(4): 963-74.
- Nevitte, N., A. Blais, E. Gidengil y R. Nadeau. 2000. *An Unsteady State: The 1997 Canadian Federal Election*. Toronto: Oxford Univ. Press.
- Norris, P. 2002. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Nueva York: Cambridge Univ. Press.
- Oliver, J. E. 2000. «City size and civic involvement in metropolitan America», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 94: 361-73.
- Pérez-Liñán, A. 2001. «Neoinstitutional accounts of voter turnout: moving beyond industrial democracies», *Elect. Stud.*, 20(2): 281-97.
- Plutzer, E. 2002. «Becoming a habitual voter: inertia, resources and growth in young adulthood», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 96: 41-56.
- Powell, G. B. 1982. *Comparative Democracies: Participation, Stability and Violence*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.
- Powell, G. B. Jr. 1986. «American voter turnout in comparative perspective», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 80(1): 17-43.
- Powell, G. B. y G. D. Whitten. 1993. «A crossnational analysis of economic voting: taking account of the political context», *Am. J. Polit. Sci.*, 37: 391-414.
- Radcliff, B. 1992. «The welfare state, turnout, and the economy», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 86: 444-56.
- Radcliff, B. y P. Davis. 2000. «Labor organization and electoral participation in industrial democracies», *Am. J. Polit. Sci.*, 44(1): 132-41.
- Rallings, C. y M. Thrasher. 2007. «The turnout 'gap' and the costs of voting: a comparison of participation at the 2001 general and 2002 local election in England», *Public Choice*, 131(3): 333-344.
- Rose, R. 2004. «Voter turnout in the European Union member countries», en R. Lopez Pintor y M. Gratschew, eds. *Voter Turnout in Western Europe since 1945*, Estocolmo: Int. IDEA: 17-24.
- Rosenstone, S. J. «Economic adversity and voter turnout», *Am. Polit. Sci. Rev.*, 26: 25-46.
- Siaroff, A. y J. W. A. Merer. 2002. «Parliamentary election turnout in Europe since 1990», *Polit. Stud.*, 50: 916-27.
- Southwell, P. L. 2004. «Five years later: a reassessment of Oregon's vote by mail electoral process», *PS: Polit. Sci. Polit.*, 37: 89-93.

- Taagepera, R. y M. Soberg Shugart. 1989. *Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems*. New Haven, CT: Yale Univ. Press.
- Wolfinger, R. E. y S. J. Rosenstone. 1980. *Who Votes?* New Haven, Cincinnatti: Yale Univ. Press.

ANDRÉ BLAIS

andre.blais@umontreal.ca

Es profesor en el Departamento de Ciencia Política, Université de Montreal PQ H3C 3J7, Canadá.